

Chile: la Memoria como fuerza de la Historia

Mario Amorós*

En nuestro tiempo seguimos luchando y construyendo los mismos sueños de justicia y libertad. Y para ello rescatamos la Memoria Histórica. Una Memoria que nos da fuerza ética y moral para luchar valientemente, porfiadamente por un presente y un futuro. Una memoria que sirva a todos los pueblos y juventudes para saber qué fue el Gobierno de Allende y qué significó el golpe militar fascista y la intervención de EE.UU. Convertir la memoria en un arma de lucha.

Gladys Marín, septiembre de 2003ⁱ

I. La primacía del olvido

Viajé a Chile por primera vez en julio de 1997. Visto desde la perspectiva actual, fue un momento muy interesante para viajar a aquel país porque, sin imaginarlo entonces, faltaba un año para la detención de Pinochet en Londres, hito que sacudió los frágiles cimientos de esta interminable Transición, basada en el olvido y la impunidad, cambió el curso de la historia reciente de este país y desencadenó una auténtica “Batalla de la Historia” a partir de los debates sobre la Memoria.

En agosto de 1997 el desaparecido periódico *La Época* publicó un artículo muy relevante del entonces embajador chileno en España, el socialista Álvaro Briones, porque reflejaba el clima de la elite política. Desde su embajada en Madrid, Briones extrajo de la experiencia española lecciones de este calibre: “La transición (...) es un proceso de reconstrucción de la institucionalidad democrática (...) pero sin dar la razón a nadie respecto de ese anterior conflicto (...) En un proceso de

* **Mario Amorós** es licenciado y Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. El 30 de mayo presentó esta ponencia en la asignatura “Memoria Histórica del Siglo XX”, impartida por el catedrático Julio Aróstegui en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. El título de esta ponencia es deudor de un libro publicado por la Comisión Ética contra la Tortura de Chile publicado en 2004..

transición (...) no puede haber culpables ni castigos (...), lo que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública”ⁱⁱ.

Por su parte, el periodista Gervasio Sánchez narra hasta qué simas puede llegar la estrategia del olvido. Cuenta que el escritor Luis Sepúlveda visitó en 1996 al destacado senador socialista Carlos Ominami, hijo de un coronel de la Fuerza Aérea constitucionalista preso, torturado y juzgado después del golpe de estado en el consejo de guerra caratulado como “contra Bachelet y otros”.

Al asomarse a la ventana de su despacho y contemplar una marcha de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Ominami exclamó: “Otra vez esas viejas gritando”. Pese a que Sepúlveda le advirtió de quién se trataba (de las mujeres que primero salieron a la calle para denunciar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura; de las mujeres que no han cesado durante más de treinta años de exigir Verdad, Justicia y Memoria), el senador socialista, dirigente de un partido que perdió a sus mejores militantes en las mazmorras de Pinochet, aseguró: “Esas mujeres son el pasado y Chile necesita mirar hacia el futuro”ⁱⁱⁱ.

Algo empezó a cambiar en Chile el 12 de enero de 1998, cuando la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, presentó la primera querrela criminal contra Augusto Pinochet en su país y el azar quiso que su instrucción recayera en un juez desconocido de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, quien la admitió a trámite y emprendió una investigación rigurosa de ésta y de las sucesivas denuncias que se fueron interponiendo desde entonces contra el tirano.

Dos meses después, el 11 de marzo, Pinochet abandonó después de casi 25 años la jefatura del ejército y se convirtió en senador vitalicio gracias a la

Constitución que impuso en 1980. El 6 de marzo había sido nombrado “comandante en jefe benemérito” y el día que cedió el mando del ejército al general Ricardo Izurieta reivindicó una vez más el golpe de estado^{iv}:

En el devenir de nuestra historia fue generándose un estado de conflicto público, cada vez más extendido, agudo e incontrolable. Conflicto que llegó a afectar a la subsistencia de la patria misma, como nación libre y Estado soberano. ¡Eran evidentes las posibilidades de autodestrucción de Chile! Las Fuerzas Armadas, destinadas a asegurar y defender la integridad de la patria, debieron en esas circunstancias extremas pronunciarse. El ejército y sus instituciones hermanas asumieron la conducción del Estado y se abocaron a la restauración de la institucionalidad quebrantada y a la reconstrucción social, política y económica del país.

La sorprendente e histórica detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998 amenazó la impunidad judicial e histórica vigente en Chile tanto como la arrogancia del decrépito general^v. En apenas tres semanas, el tirano contempló aterrorizado como la pesadilla de ser juzgado empezaba a parecer real por primera vez. El 3 de noviembre el juez Garzón solicitó a la ministra de Justicia española que pidiera al Gobierno británico la extradición de Pinochet y una semana después decretó su procesamiento por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El 25 de noviembre, el día que cumplió 83 años, el comité judicial de la Cámara de los Lores revocó la inmunidad reconocida semanas antes a Pinochet ya que sus crímenes no estaban amparados por la legislación británica.

En este contexto, el 12 de diciembre el tirano difundió el que fue considerado pomposamente como su testamento político, ya que sus partidarios vaticinaban entonces su muerte inminente debido a tanto “sufrimiento”. En su “Carta a los chilenos”, Pinochet llegó a referirse incluso a nuestro oficio: “Ningún historiador, ni aun el más sesgado y poco objetivo, puede ni podrá mañana sostener de buena fe que mis actuaciones públicas respondieron a una supuesta ambición personal o a

cualquier otro motivo que no fuera el bien de Chile”. Todos sus argumentos se centraron entonces en justificar que su detención en Londres era la última maniobra de sus enemigos y en reivindicar el golpe de estado una vez más^{vi}:

El dilema era: o vencía la concepción cristiana occidental de la existencia para que primara en el mundo el respeto a la dignidad humana y la vigencia de los valores fundamentales de nuestra civilización; o se imponía la visión materialista y atea del hombre y la sociedad, con un sistema implacablemente opresor de sus libertades y de sus derechos.

Una de las respuestas más sólidas a las mentiras de Pinochet provino un mes después de un grupo de historiadores al que se fueron sumando decenas de colegas. Aquel documento se conoció como el “Manifiesto de Historiadores”^{vii} y en su punto más importante de análisis de la historia de Chile subrayaron que la crisis de 1973 no fue responsabilidad de la Unidad Popular, sino que su origen radica en “el siglo XIX o antes”:

Es preciso considerar que las crisis ‘pre-populistas’ de 1851, 1859, 1890-1891, 1907-1908, 1924, 1930-1932 y las crisis ‘desarrollistas’ de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-1969 revelan, en conjunto, que el daño estructural causado por un siglo de gobiernos oligárquicos y neooligárquicos era de difícil remonte por vías democráticas. Por esto, el intento de ‘reducir’ la crisis estructural de la sociedad chilena a la crisis ‘política’ del periodo 1970-1973 y la responsabilidad histórica estratégica al programa reformista de la Unidad Popular, no tiene cabida en la lógica del análisis científico...

Desde aquellos días el debate sobre la historia reciente de Chile ha atravesado la pugna política y la agenda mediática. En este debate la memoria histórica ha desempeñado un papel esencial y ha suscitado la intervención de los partidos políticos, los movimientos sociales, las distintas confesiones religiosas, el Gobierno y el movimiento de derechos humanos. Con el precedente del Informe Rettig, los principales hitos han sido la Mesa de Diálogo, los procesos judiciales contra decenas de oficiales, las conmemoraciones de los 30 años del golpe de estado y el Informe sobre Prisión Política y Tortura de noviembre de 2004.

II. Verdad, Justicia y... Memoria

En 1974, con el amparo del ecuménico Comité de Cooperación para la Paz, empezaron a organizarse varios grupos de personas que se preocupaban de la suerte de sus familiares presos o detenidos desaparecidos. Así, nació a finales de aquel año la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El 25 de marzo de 1975 los familiares de los detenidos desaparecidos realizaron un acto ecuménico en la iglesia de Santiago Apóstol de la capital chilena. En este acto asomaron ya las tres divisas del movimiento de derechos humanos: Verdad (saber qué les había sucedido a sus seres queridos), Justicia (juicio y castigo a los responsables de su desaparición) y Memoria (reivindicación de la vida y el compromiso con el socialismo de sus familiares). Una de las tres mujeres que tomó la palabra se llamaba Norma^{viii}:

Nuestros esposos, hijos y padres están desaparecidos. Sabemos que no han cometido ninguno de los delitos que enumeran los códigos legales... Están detenidos y secuestrados simplemente por el delito de creer en un mundo mejor, por tener la certeza de que puede construirse una sociedad más justa y luchar por conquistarla. Sus ideales y sus luchas nos señalan que debemos tener mucho valor para enfrentar estas adversidad y seguir preguntando, pidiendo, buscando hasta que podamos encontrarlos.

El énfasis en la memoria podía explicarse por las campañas de propaganda negra y de guerra psicológica orquestadas por el régimen desde el 11 de septiembre de 1973 para justificar el derrocamiento del Gobierno constitucional y la instauración de la tiranía: el discurso pinochetista giró en torno a las pretensiones de la Unidad Popular de instalar una dictadura (la difusión del "Plan Z" fue la maniobra más recordada) y a la insistencia en el caos económico y político que habría causado el intento de construcción del socialismo.

En aquellos momentos la mayor parte de los desaparecidos eran dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), masacrado a lo largo de 1974 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Un cambio notorio en la estrategia de la AFDD se produjo a partir de 1976, cuando se incorporaron los familiares de los desaparecidos comunistas, Partido que fue diezmado aquel año por la DINA y por el Comando Conjunto. De hecho, en junio de 1977 26 miembros de la AFDD iniciaron su primera huelga de hambre, de nueve días, en la sede de la CEPAL para exigir a la dictadura que revelara el paradero de sus familiares.

En mayo de 1978, un mes después de que el gobierno de Pinochet aprobara el decreto-ley 2.191, conocido como la Ley de Amnistía, la AFDD planificó su tercer gran ayuno público, que después sería conocido como “la huelga de hambre larga”. Cuando finalizó, tras 17 días, había 110 grupos en huelga de hambre en 70 ciudades de 23 países en solidaridad con los detenidos desaparecidos de Chile y sus familiares. A pesar de las promesas que la junta militar realizó a Naciones Unidas o a la Iglesia católica chilena, sus únicas respuestas fueron las mentiras más burdas y una crueldad implacable.

La primera evidencia de la tragedia de los detenidos desaparecidos se descubrió de manera casual el 1 diciembre de 1978, cuando varios miembros de la Vicaría de la Solidaridad, dos periodistas y Máximo Pacheco, vicepresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, verificaron que en un horno de cal abandonado a 27 kilómetros de Santiago, en el fundo llamado La Rinconada de Lonquén, había restos óseos de seres humanos. En febrero de 1979, después de su reconocimiento e identificación en el Servicio Médico Legal de Santiago, se estableció que se trataba de los once campesinos y los cuatro jóvenes del pueblo

de Isla de Maipo secuestrados por carabineros los días 6 y 7 de octubre de 1973. El angustioso drama de los detenidos desaparecidos, la ya eterna pregunta “¿dónde están? tuvo una primera respuesta: Lonquén. Aquellos campesinos fueron denunciados por el patrón por su compromiso con la reforma agraria y su adscripción a los partidos de la UP.

El domingo 25 de febrero de 1979 la AFDD organizó la primera romería a Lonquén en la que participaron casi dos mil personas, que caminaron cinco kilómetros hasta los hornos bajo un sol justiciero. En la boca de los hornos depositaron flores, cruces, fotografías de estas personas y en la parte superior plantaron una gran cruz de madera que fue bendecida por Cristián Precht, vicario de la Solidaridad, con estas palabras: “Que de este lugar de horror surja el manantial de esperanza”. También se fijó allí una placa con unos versos del *Canto General*: “Aunque los pasos toquen mil años este sitio / no borrarán la sangre de los que aquí cayeron / y no se extinguirá la hora en que caísteis / aunque miles de voces crucen este silencio”. Juan Luis Maureira, hijo y hermano de cuatro de los quince hombres asesinados en Lonquén, asegura: “Vinieron muchos familiares de detenidos desaparecidos que aún desconocen dónde están sus seres queridos. Para ellos el sufrimiento sigue cada día...”^{xix}.

III. Transición e impunidad: El Informe Rettig

Los familiares de los detenidos desaparecidos fueron los primeros en manifestarse dentro del país contra la dictadura militar. A partir de mayo de 1983, con las Protestas Nacionales, las movilizaciones ya congregaron a centenares de miles de

personas y el repudio a Pinochet se expresó en la creación de un sinfín de plataformas políticas, movimientos sociales, estudiantiles, de *pobladores*, de defensa de los derechos humanos. Entre 1983 y 1986 la oposición democrática cercó a Pinochet y a su régimen, pero tras el fallido tiranicidio del 7 de septiembre de 1986 protagonizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la Democracia Cristiana y los sectores moderados del socialismo se avinieron a negociar con el régimen una salida pactada.

Esta implicó la pervivencia de un importante legado institucional, que, con la excepción de la ley electoral binominal, que excluye a la izquierda del Congreso Nacional, se derogó por fin el pasado 11 de marzo, y el mantenimiento del modelo económico neoliberal. Chile es uno de los países donde la brecha social es mayor, la dictadura destruyó los derechos sociales (sanidad, educación, pensiones) y el movimiento obrero está absolutamente indefenso ya que continúa vigente la legislación laboral de Pinochet.

Tras su derrota en el histórico plebiscito del 5 de octubre de 1988, el dictador cedió el poder al demócratacristiano Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. Aylwin, candidato único de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 con un programa que contemplaba una política efectiva de derechos humanos (con la derogación de la ley de Amnistía de 1978), creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que le entregó a principios de 1991 su Informe, conocido como Informe Rettig por el jurista (Raúl Rettig) que la presidió.

El 4 de marzo de 1991 al dirigirse al país por televisión para presentar las 1.353 páginas del Informe Rettig, Patricio Aylwin, con lágrimas en los ojos, pronunció

unas ceremoniosas palabras: “En nombre del pueblo chileno, pido perdón a las víctimas y a sus familiares”. Con este voluminoso estudio, el Estado chileno asentó una verdad oficial y expuso unas conclusiones sobre el carácter y la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura: “Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 existió una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos”.

El Informe Rettig recoge los miles de asesinatos y desapariciones ocurridos durante los 17 años de dictadura, pero, como criticó CODEPU, ocultó la identidad de sus responsables, la tortura (“la principal arma de destrucción y sometimiento de la dictadura”) quedó excluida de su mandato y, aunque sugirió un conjunto de medidas de “reparación” para los familiares de las víctimas, de los crímenes que reconoció no se derivaron responsabilidades penales, al contrario de lo sucedido en Argentina con el Informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos.

El sociólogo Tomás Moulian asegura que la Concertación (la coalición neoliberal que gobierna Chile desde marzo de 1990 liderada por demócratacristianos y socialistas) concibió el Informe Rettig y aquel discurso de Aylwin como “un punto final, no legal pero sí simbólico, al tema de la memoria y del pasado”^x. Pero esta estrategia fracasó –sostiene Moulian- porque las Fuerzas Armadas, y sobre todo el ejército, rechazaron el gesto que acompañó al Informe Rettig y su responsabilidad en los crímenes expuestos en éste^{xi}.

Pinochet aseguró que la institución que comandaba negaba validez “histórica y jurídica” al Informe Rettig y no halló “razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esa patriótica labor”^{xii}. Por su parte, Manuel Contreras, ex director

de la DINA, proclamó: “Estos señores todavía creen en la guerra con encajes... Los vencedores no tienen cuentas que rendir a los vencidos”^{xiii}.

El clima favorable a la causa de los derechos humanos perduró tan sólo unos meses más y así a principios de junio de aquel 1991 el testimonio del doctor y dirigente comunista Alberto Neumann permitió ubicar la fosa común donde fueron arrojados los cadáveres de los militantes de izquierda asesinados en septiembre y octubre de 1973 en el campo de concentración de Pisagua por los militares al mando del general Forestier.

Por las peculiares condiciones ambientales de esta caleta del extremo norte del país (la salinidad del terreno y la aridez del desierto), los cuerpos se habían conservado de una manera estremecedora e incluso sus rostros mantenían los gestos de dolor. Cuando Pinochet supo que en Pisagua y en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago se habían encontrado los cuerpos de varios desaparecidos en una misma fosa, declaró a la prensa: “¿Creen que abrir las tumbas ayuda a la reconciliación nacional? (...) Cuando me dijeron: hay una tumba con dos cadáveres... ¡Qué economía tan grande!”^{xiv}.

A partir de entonces, la Concertación y la derecha, con la anuencia de los grandes medios de comunicación se entregaron a la tarea de imponer el olvido en la esfera de la memoria histórica y la impunidad con la aplicación sistemática de la ley de Amnistía por los tribunales. No obstante, el mandato de Aylwin concluyó con la inauguración el 26 de febrero de 1994 del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político en el Cementerio General de Santiago, donde figuran esculpidos en un impresionante mural de granito los nombres de

todas las víctimas de la dictadura reconocidas por el Estado. En su discurso, la histórica presidenta de la AFDD, Sola Sierra, aseguró^{xv}:

Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con la vida, paradójicamente frente al símbolo de la memoria de nuestros detenidos desaparecidos. La memoria vence al olvido, ese olvido que se asocia inexorablemente a la muerte. El recuerdo vence por eso a la muerte. Y también se convierte en ejemplo de heroísmo, de humanidad y testimonio de dolor y sufrimiento que son también expresiones de vida, de voluntad de cambio y superaciones (...) Detenidos desaparecidos: si levantan los ojos verán que aquí nuevamente nos hemos congregado, porque nunca los hemos olvidado, porque el sueño que ustedes tuvieron tiene plena vigencia.

IV. El acuerdo de la Mesa de Diálogo

La detención de Augusto Pinochet en Londres durante 503 días reveló hasta qué punto el Gobierno, y en particular el Partido Socialista, estaban comprometidos con la impunidad del tirano. Entonces sucedió lo que pocos podían imaginar: la cancillería chilena, dirigida primero por el socialista José Miguel Insulza (hoy secretario general de la OEA) y en los meses finales del gobierno de Eduardo Frei por el socialista Juan Gabriel Valdés, se empleó a fondo para rescatar a Pinochet, desconociendo el Derecho Internacional, que exige la persecución de los crímenes de lesa humanidad en cualquier lugar del planeta, más aún cuando en el país donde ocurrieron prevalece una impunidad lacerante y casi inexpugnable.

La estrategia de La Moneda se articuló en torno a las negociaciones secretas con Londres y Madrid para lograr la liberación de Pinochet “por razones humanitarias” y en torno al discurso sobre la posibilidad cierta de enjuiciar al dictador en Chile, donde las querellas se acumulaban en la mesa del juez Juan Guzmán. Además, a instancias del ejército, el Gobierno de Frei promovió la llamada Mesa de Diálogo, que reunió por primera vez a representantes de las Fuerzas Armadas con cuatro abogados de derechos humanos y otras destacadas

personalidades. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos y la inmensa mayoría de los letrados que lo apoyan criticaron una iniciativa cuya meta era asegurar la impunidad amenazada por primera vez.

De nuevo aquí la memoria histórica fue desafiada por las instancias de poder. El 13 de junio de 2000 el presidente Ricardo Lagos, en una solemne ceremonia celebrada en La Moneda ante todas las instituciones del Estado, anunció el acuerdo alcanzado por la Mesa de Diálogo, que asumió la visión de la historia construida por los pinochetistas, la derecha y las Fuerzas Armadas, repetida mil veces por el dictador:

Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos de 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen legítimamente, distintas opiniones.

Este acuerdo, que aludió a la destrucción de la democracia con una expresión que blanquea la Historia (“los hechos del 11 de septiembre de 1973”), fue rechazado por el movimiento de derechos humanos y la izquierda. La expresión “espiral de violencia política” sirvió a los historiadores conservadores para insistir en la “leyenda negra” que han construido sobre el MIR, para recuperar las resoluciones del Congreso del Partido Socialista de 1967 en Chillán... e imputar así a la izquierda la responsabilidad de lo que Arturo Valenzuela llamó “el quiebre de la democracia”.

Lagos escogió la coyuntura en que expuso el acuerdo de la Mesa de Diálogo, puesto que hacía apenas ocho días que la Corte de Apelaciones de Santiago había despojado a Augusto Pinochet de su inmunidad como senador vitalicio al considerar que existían “fundadas sospechas” sobre su participación criminal en el

secuestro, tortura y desaparición de al menos 19 personas en la *caravana de la muerte*. Fue también en aquellos días cuando el entonces comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Izurieta, desafió a los historiadores al afirmar que, al igual que otras personalidades históricas, el destino del tirano consistía en “esperar el juicio de la historia y no el de sus contemporáneos”^{xvi}.

V. La batalla de la memoria

Hasta la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, cada año el tirano y sus partidarios celebraban de manera soberbia la “gesta del 11 de septiembre”, día que además fue festivo en Chile hasta 1998. En consecuencia, desde el final de la dictadura y hasta el 25 aniversario de la destrucción de la democracia prevalecía de manera aplastante el tradicional discurso que proclamaba el fracaso del Gobierno de Allende y la justificación del golpe militar en sus distintas versiones, desde la más dura (fue una operación quirúrgica para extirpar el “cáncer marxista” de Chile) hasta la más moderada (fue una respuesta a las demandas de una supuesta “mayoría nacional”).

En 2003, la conmemoración de los 30 años de la muerte del Presidente Allende fue ya muy distinta y tuvo una expresión muy novedosa: las televisiones chilenas proyectaron documentales e imágenes del periodo 1970-1973 hasta entonces censuradas y que ofrecían una imagen positiva del Gobierno de Allende y develaban las agresiones que sufrió de parte del imperialismo y la derecha. Además, fruto del proceso de recuperación de la memoria histórica, en 2003 se celebraron multitud de actividades, exposiciones, ciclos de conferencias,

seminarios... muy plurales sobre aquel periodo y en general sobre la historia del último medio siglo chileno y se publicaron centenares de libros.

Meses después *Machuca*, una hermosa película de Andrés Wood que nos cuenta la historia de unos humildes muchachos en los tiempos previos al golpe de estado, se convirtió en la película chilena más vista de siempre. Una y otra vez, con distintas expresiones, la memoria histórica se hace presente.

A nuestro juicio, este despertar de la memoria también guarda una estrecha relación con una juventud chilena que nació y creció en la dictadura y que es víctima de un modelo neoliberal que le condena a una educación a precios exorbitantes y que le dispensa un futuro de precariedad. Y sobre todo una juventud que explora en viejos libros, en la música, en los testimonios de los supervivientes, en las luchas de los activistas de derechos humanos un pasado traumático que no es el que le contaron los periódicos y las televisiones, que en la escuela es marginado y que muchas familias recubren con el manto del olvido.

Asimismo, entre mayo y agosto de 2003 todos los partidos políticos y el Gobierno plantearon sus propuestas respecto al expediente de los derechos humanos. El 12 de agosto Ricardo Lagos se dirigió al país por televisión para pronunciar su discurso “No hay mañana sin ayer”, que recogía su propuesta sobre derechos humanos. La principal medida fue la creación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Lagos afirmó:

Se violaron los derechos humanos: se asesinó, se torturó, se detuvo, se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.

Al final de su discurso, Lagos habló de avanzar hacia “un Chile con un mañana compartido para nuestros hijos. Un mañana construido, no sobre la base engañosa y frágil del olvido, sino sobre la base sólida de nuestra memoria histórica”^{xvii}. Pero la mayor parte de sus propuestas, que obviaban el necesario juicio a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y no se referían a la derogación de la ley de Amnistía, fueron rechazadas por el movimiento de derechos humanos.

En septiembre de 2003, en los días en que miles y miles de chilenos recordaban al gobierno de Salvador Allende, quedó patente la existencia de varias visiones enfrentadas del pasado reciente de Chile. Obviamente, en ninguna sociedad existe una única memoria histórica, ya que, además, el sentido del pasado, como señaló Paul Ricoeur, está sujeto a interpretaciones muchas veces ligadas a las expectativas sobre el presente o el futuro^{xviii}.

a) “La memoria oficialista”: En su discurso del 11 de septiembre de 2003, Lagos recordó a Allende, no para evocar su vida dedicada a la construcción de un gran movimiento popular por el socialismo, sino tan sólo su sacrificio como Presidente “en cumplimiento de su deber”. Esto simboliza la mutación del socialismo chileno, desde los postulados revolucionarios del marxismo-leninismo hasta su asunción acrítica actual del neoliberalismo. Lagos añadió^{xix}:

También es un momento para la reflexión. Reflexión de un país donde cada día más ese dolor se convierte en memoria, en memoria de todos los chilenos, en memoria compartida, aunque no necesariamente común, porque es natural que existan visiones diversas de lo acaecido hace 30 años. Reflexión, eso sí, de un país que manifiesta su voluntad de que ello no debe volver a ocurrir en nuestra historia.

b) “La memoria miserable”: en agosto de 2003 *El Mercurio*, diario vocero de la derecha desde 1827, publicó una entrevista a Luis Guastavino, ex diputado

comunista por Valparaíso y entonces intendente de la V Región, en la que este expresó los argumentos prototípicos de los conversos vergonzantes: "... lo que hay que recordar más es lo que causó el golpe. Porque lo que ocurrió después obnubila el análisis severo y riguroso de los políticos"^{xx}. A su juicio los responsables del golpe fueron: "Los chilenos. Nosotros. Los sectores políticos. La irresponsabilidad con que llegamos a lo que se llegó". Su exposición abundó en mentiras propagadas mucho antes por el pinochetismo, como que la Unidad Popular iba a instaurar un régimen estalinista:

El gran problema fue propio del siglo XX. Una dicotomía en la cual la sociedad dejó de ser sociedad y se transformó en barricada. Allá los buenos, acá los malos, los progresistas, los reaccionarios, los derechistas, los izquierdistas. Una dicotomía que va contra la inteligencia. Y en eso caímos muchos. Yo caí ¡40 años de mi vida! (...)

Porque la utopía era deslumbrante. Enceguecía. Científicos, intelectuales, gente sumamente preparada en todo el mundo cayó seducida por esa utopía preciosa. Los desarraigados, los miserables van a cambiar de vida. Sentirse uno protagonista de la posibilidad de que llegara una primavera humana distinta, justa, superior, eso obnubiló y produjo lo que produjo, no sólo en Chile. Pero esta teoría fracasó estrepitosamente.

Y no por hermosísima puede dejarme contento no pensar en cómo fue posible que yo proclamara el término de un sector socioeconómico como el del mundo empresarial. No concibo ahora que eso me haya ocurrido. La lucha de clases, el término de una clase por otra. Y lo que se postulaba, aunque fuera con vino tinto y empanadas, como decíamos para dar una peculiaridad distinta... En la UP se postulaba honestamente el socialismo donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real... La Unión Soviética cayó sin que llegara un solo tanque, 60 millones de comunistas –cuatro veces la población de Chile- y Gorbachov abrió un poco las ventanas y el ventarrón de la li-ber-tad, que nuna fue resuelto por el socialismo, entró a raudales.

Y a la pregunta sobre cuál cree que fue su responsabilidad, respondió:

Yo instigué. Yo hacía discursos incendiarios con esa utopía. Yo levantaba a la gente. Organizaba juntas de vecinos, sindicatos, poblaciones, estudiantes para la consecución de ese logro que, honestamente, creía esplendente para el ser humano. Es una responsabilidad tremenda, no delictual. (...)

Yo no tengo nada que ver con algún acto de sangre. Pero murió mucha gente y tenemos una responsabilidad que no sólo cae sobre los que se hicieron cargo del país. La política que nosotros llevamos en los tiempos finales, esta ideología que yo sustentaba, iba inevitablemente a un choque que tenía que producir efectos tremendos.

Estas declaraciones, más elaboradas eso sí, hace tiempo que las hacen otros connotados ex dirigentes de la izquierda, ayer revolucionarios que criticaban el

“reformismo” de Allende y el Partido Comunista, hoy empresarios de éxito en un Chile neoliberalizado por la dictadura.

c) El “nunca más” de Cheyre: los cuatro años del general Emilio Cheyre en la comandancia del ejército chileno (2002-2006) se caracterizaron por varios gestos que pretendieron afirmar la existencia de un cambio en las Fuerzas Armadas que no existe. A comienzos de aquel año publicó una columna en *La Tercera*^{xxi}:

Al iniciar 2003 quisiera plantear el íntimo deseo de que ésta sea una fecha que no signifique enfrentamientos o animadversiones entre sectores de la sociedad chilena. Preferiría que esta cuarta década –del día en que nos vimos todos envueltos en una gravísima enemistad cívica- sea un periodo de reflexión profunda y amplia, en torno a los valores que nos unen y sobre los cuales construimos cotidianamente el futuro de Chile.

El 13 de junio en Calama, ciudad donde la *caravana de la muerte* asesinó el 19 de octubre de 1973 a 26 militantes de izquierda con una brutalidad indescriptible, el general Cheyre pronunció su particular “nunca más”, sobredimensionado por los medios de comunicación:

La sociedad, a través de todas sus autoridades –no sólo el gobierno-, tiene la oportunidad de enfrentar el problema en su conjunto. Me refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida.

El 11 de septiembre de 2003, Cheyre, jefe del ejército (cuyo lema es “siempre vencedor, jamás vencido”), visitó a Pinochet.

d) La memoria del pinochetismo: el 26 de agosto de 2003 dos mil personas, la derecha más dura del país, se congregaron en el centro de eventos Casa Piedra para rendir homenaje a Hermógenes Pérez de Arce, diputado del derechista Partido Nacional en 1973 y hoy columnista de *El Mercurio*, en una cena “por el rescate de la verdad histórica de Chile” a la que asistió la esposa del ex dictador.

En el que fue el acto más importante del “pinochetismo” en varios años, Pérez de Arce, criticó al Gobierno, al Poder Judicial y a Cheyre por los procesos abiertos contra centenares de militares y semanas después proclamó frente al tibio “nunca más” expresado por Cheyre^{xxii}:

Bueno, él está diciendo: “Nunca más a los que nos empujaron a esto”. Es como decir: “Nos empujaron a hacer algo malo”. Yo le digo: ¿Y si hay otro Gobierno igual al de Allende, si viola la Constitución, si propone instalar un régimen totalitario, no va a intervenir? Entonces, le digo: ¡Otra vez! ¡No “nunca más”. Tiene que hacerlo. En bien de la Patria. (...)

Es como si él dice: “Todos tenemos que luchar para que nunca más pasen estas cosas”, estaría perfecto. Pero él dice: “Nunca más a los que nos instigaron a intervenir”, como si los hubieran instigado para una cosa negativa o mala, cuando de lo que se trataba era salvar al país, y lo hicieron. ¡Como nunca más vamos a salvar al país si está en peligro! ¡Tienen que salvarlo! Yo me opongo al “nunca más” en esa acepción.

El 11 de septiembre Augusto Pinochet entregó a la fundación que lleva su nombre la banda presidencial que usó durante su gobierno. El presidente de la misma, el empresario Hernán Briones, señaló: “Se cumplen 30 años del pronunciamiento militar que cambió la cara de este país. Hoy somos el país más sólido de América Latina, la envidia de muchos países, gracias a la labor de reconstrucción que hizo el gobierno militar durante sus 17 años”^{xxiii}.

e) La memoria de la izquierda: la tarde del 11 de septiembre cerca de veinte mil personas se reunieron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda y junto a la estatua del Presidente Allende inaugurada en junio de 2000. Intervinieron el ex ministro de la UP Humberto Martones, presidente del Comité 30 Años, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista, el ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega o el trovador cubano Silvio Rodríguez. Antes de finalizar el acto subieron al escenario los jóvenes que participaron en la huelga de hambre “Luciano Carrasco” que duró 18

días, quienes ratificaron su compromiso de lucha contra la impunidad mientras los acordes de “El pueblo unido jamás será vencido” empezaban a sonar.

Unos días antes, en el seminario internacional organizado por el ICAL en Santiago de Chile, Gladys Marín reivindicó el legado revolucionario de Salvador Allende^{xxiv}:

La unidad de todos los que anhelamos un mundo más justo es la exigencia inteligente ante estos tiempos difíciles, pero potenciadores de cambios democráticos.

Desde este escenario histórico señalamos nuestra absoluta disposición a construir unitariamente desde la base social y política una alternativa democrática y popular que en movimiento, en participación y en lucha se plantee una sociedad con justicia global, nueva distribución de los ingresos, defensa de la soberanía nacional. Contra los planes guerreristas y anexionistas de los EE.UU, contra las operaciones militares conjuntas, las bases militares, contra el TLC y el ALCA, en solidaridad activa con todos los pueblos de América Latina y el Caribe.

En nuestro tiempo seguimos luchando y construyendo los mismos sueños de justicia y libertad. Y para ello rescatamos la Memoria Histórica. Una Memoria que nos da fuerza ética y moral para luchar valientemente, porfiadamente por un presente y un futuro. Una memoria que sirva a todos los pueblos y juventudes para saber qué fue el gobierno de Allende y qué significó el golpe militar fascista y la intervención de EE.UU. Convertir la memoria en una arma de lucha.

Nuestro grito ante eso es luchar, luchar, organizar, organizar, conciencia, conciencia, con fuerza, en las calles, es resistir, usar la legítima defensa de la vida y con la más amplia unidad del pueblo.

Con poesía, con ideas, con lucha, con sacrificio y una lucha incansable de todos los días realizando ahí al nuevo sujeto histórico por los cambios.

La semilla de Allende está germinando. Lo mejor del pueblo, curadores de esa semilla, la cuidaron y la protegieron, y como la memoria es como la tierra, esa semilla está germinando. Y hoy en este siglo por obra de los pueblos, de los que aman y respetan la tierra, la semilla allendista es patrimonio de la humanidad y florece en todo lugar.

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, dijo Salvador Allende. Tenemos que continuar haciéndola.

¡Con Allende, mil veces VENCEREMOS!

VI. La memoria de la tortura

A principios de noviembre de 2004, cuando la expectación invadía Chile ante la inminente revelación del contenido del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocido como Informe Valech por el obispo católico – Sergio Valech- que presidió esta Comisión), el general Cheyre publicó un artículo al que volvió a dársele mayor importancia de la que tuvo, ya que, por ejemplo, *El*

País tituló: “El Ejército chileno asume su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos”. Este rotativo señaló que por primera vez el ejército reconoció su responsabilidad institucional (ya no hablaba de “excesos individuales” o de “hechos aislados”) en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura^{xxv}.

Sin embargo, en aquel artículo el jefe del ejército justificó el golpe de estado y los crímenes de la dictadura por el contexto histórico de la *guerra fría* y la pugna entre capitalismo y socialismo que se reprodujo a escala nacional^{xxvi}:

Como consecuencia de la situación descrita, el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en éste, nuestro país. Actuó –en este contexto- con la absoluta certeza de que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente.

La única novedad del posicionamiento de Cheyre fue su anuncio de que el Ejército acataría el contenido y las conclusiones del Informe Valech^{xxvii}.

El 28 de noviembre el presidente Lagos entregó al país el Informe Valech, que recogía el testimonio de más de 35.000 personas^{xxviii}. Su contenido y las reacciones de todos los sectores sociales situaron de nuevo el expediente de la Memoria Histórica, a través de la tortura, en el centro del debate nacional^{xxix}. En su discurso Lagos destacó la trascendencia de este documento^{xxx}:

Creo no equivocarme al señalar que este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo. Ha sido capaz de entrar –31 años después- a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos. (...)

El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile. (...) Expreso públicamente mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a todas las víctimas y a sus familias.

Los testimonios entregados por los supervivientes de la tortura a la Comisión Valech asentaron una verdad histórica, reconocida por el Estado de Chile, como ya hiciera el Informe Rettig con los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos: la dictadura que encabezó Augusto Pinochet recurrió a la tortura de manera sistemática como un herramienta de represión y terror para exterminar al movimiento popular e imponer su proyecto de refundación neoliberal del país. Sin embargo, al ocultar el nombre de los acusados y no tener consecuencias judiciales, no tuvo repercusiones en la impunidad^{xxxii}.

Apenas dos semanas después de la difusión del Informe Valech circuló el conocido como Manifiesto de Historiadores II titulado “Historiadores contra los que torturan en nombre de la patria”, suscrito por decenas de investigadores^{xxxiii}:

Esta nueva y dolorosa erupción de memoria social, surgida de más de 28.000 recuerdos de torturas vividas en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, nos ha tornado vívida la deuda pendiente en materia de verdad y justicia, así como ha ratificado, una vez más, que el olvido no se impone por decreto. Esta vez, todos han debido inclinarse ante la fuerza y verdad que emana de esos recuerdos. Ya nadie, salvo los más culpables, podrá seguir negando que en Chile, utilizando banalmente el nombre de la Patria, se torturó y se violaron los derechos civiles y humanos de un enorme número de chilenos, a quienes se consideró y trató, no como ciudadanos, sino como “enemigo interno”.

Después de criticar que vayan a mantenerse ocultos durante medio siglo (hasta 2054) los nombres de los torturadores, rebatieron a aquellos que intentaban justificar aquellos crímenes de lesa humanidad por el “contexto histórico” de enorme polarización de la sociedad chilena en 1973:

Nada de eso justificaba y justifica torturar prisioneros, violar mujeres con perros y ratones, perpetrar aberraciones sexuales, asesinar con perversión, dinamitar cadáveres y fondear en el mar los restos de esas vejaciones. Y menos aún usando todos los recintos militares y

policiales y, cuando menos, la mitad de los efectivos que la Nación ha mantenido y apertrechado para consolidar la seguridad, la dignidad y la unidad de los chilenos.

Y concluyeron:

Para poner fin de raíz a los horrores ocurridos, no basta con repetir en letanía: “nunca más”, “mea culpa”, “pido perdón” o exhortar con voz compungida a la reconciliación, o aplaudir a cualquiera que se atreva a rezar en público tales letanías. Para que el “nunca más” sea histórica y políticamente efectivo se requiere, en primer lugar, que la ciudadanía eduque y reeduce a los grupos e instituciones que, de hecho y por derecho ilegítimo, se han convertido en poderes fácticos que violan la soberanía ciudadana. En segundo lugar, se requiere que la ciudadanía se eduque a sí misma como poder soberano, para hacer posible no sólo la desaparición de las políticas de represión y tortura contra un supuesto “enemigo interno”, sino también para construir una sociedad más democrática, participativa y con una distribución más justa de las riquezas que produce. Hasta ahora, la Historia dice categóricamente: Chile, desde 1830, no ha podido nunca construir una democracia y un mercado de esa naturaleza. No pocas veces los movimientos cívicos y sociales lo han intentado, pero han pagado caro por ello, ya que los poderes fácticos han torcido, en cada caso, la voluntad soberana que animaba esos movimientos.

El “nunca más” depende, en los hechos, de que seamos capaces de desarrollar, a partir de la verdad contenida en la memoria colectiva de la ciudadanía, un movimiento cívico capaz de construir, esta vez exitosamente, lo que siempre han querido construir las generaciones de luchadores por la justicia que registra la historia social de nuestro país.

Por su parte, en enero de 2005, 26 historiadores de derecha suscribieron una declaración con relación al Informe Valech, muy interesante porque muestra el punto de vista del sector más conservador de esta sociedad. En el primero de los siete puntos de su comunicado aseguraron que no había manera de comprobar la veracidad de los testimonios entregados a la Comisión, “aunque puede razonablemente presumirse que muchos de ellos son veraces en cuanto al hecho grueso y a sus detalles”^{xxxiii}. Enseguida rechazaron el capítulo III del Informe, sobre el contexto histórico, ya que “ahí se nos presenta una vez más un conjunto de falsedades, contradicciones y afirmaciones infundadas, acompañadas de graves omisiones”:

En el plano de las omisiones se cuenta la deformación histórica más grave de la Comisión, al ignorar por completo la doble dimensión del ataque que sufre Chile desde 1973 hasta 1979, ya que se omite toda referencia a la subversión y al terrorismo continuos, estructuralmente considerados, así como datos sobre los actos concretos de cada uno de quienes testifican ante la Comisión. Esto es lo más grave: la Comisión pretende hacernos

creer que para el contexto histórico no importa nada lo que hacían los 34 mil declarantes justo antes de ser detenidos.

Este párrafo no tiene desperdicio: en primer lugar, mantiene que después del golpe de estado los partidos de izquierda –considerados como “grupos subversivos o terroristas”- amenazaban al país y, en segundo lugar, acusa de manera implícita de terroristas a las víctimas de la tortura, en su inmensa mayoría militantes de izquierda que luchaban por la recuperación de las libertades. De acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional, éste es el núcleo central del discurso con el que durante 17 años la dictadura de Pinochet justificó la crueldad de su represión, el exterminio del movimiento popular. El único terrorismo que existió en Chile fue el terrorismo de estado de la tiranía.

Y para concluir ensalzaron sin pudor la “obra humanizadora” de la dictadura:

Millones de chilenos guardan en su memoria, en sus documentos personales y en su conciencia recta, una visión claramente diferente a la propuesta por la Comisión sobre la obra humanizadora del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aun en medio de sus defectos. A la conservación y difusión de esa verdad completa seguiremos dedicando nuestro estudio, nuestra investigación y publicaciones y nuestra docencia.

VII. La geografía de la memoria

En los últimos años se han inaugurado múltiples espacios públicos relacionados con la memoria histórica en distintas ciudades chilenas. Los más usuales son los memoriales que en algunas ciudades recuerdan a los detenidos desaparecidos y a los ejecutados de la localidad y las distinciones que señalan que determinadas casas o recintos fueron centros de detención clandestina y tortura.

a) Entre los gestos más simbólicos de las autoridades podemos citar, además de la inauguración de la estatua del Presidente Allende frente a La Moneda y del

Memorial del Cementerio General de Santiago, la reapertura de la puerta de la calle Morandé 80 en La Moneda y el cambio de nombre del Estadio Chile a petición de la Fundación Víctor Jara, organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda, artistas e intelectuales: ahora se llama **Estadio Víctor Jara**. El Estadio Chile fue el recinto deportivo donde desde el mismo 11 de septiembre de 1973 miles de militantes de izquierda fueron encerrados y torturados y donde Víctor Jara fue asesinado de manera brutal.

b) Villa Grimaldi (el “Cuartel Terranova” en la jerga de la DINA) fue el peor centro de detención clandestina y tortura de la dictadura de Pinochet. Situado en el extremo oriente de la ciudad de Santiago, de allí desaparecieron al menos 226 personas y más de cinco mil prisioneros sufrieron martirio. Desde hace una década lo que fue Villa Grimaldi es el Parque por la Paz, el primer memorial construido en América Latina sobre un antiguo centro de torturas. Dado que la dictadura destruyó casi todas sus edificaciones, la corporación que lo dirige ha marcado sobre la hierba cada uno de los espacios de aquel espanto. Hace dos años tuve la oportunidad de visitar Villa Grimaldi, guiado por Pedro Matta, investigador en DDHH y superviviente de este centro. El doctor Patricio Bustos, superviviente del Cuartel Terranova, afirma^{xxxiv}:

Algunos han querido matar sus fantasmas, borrar los recuerdos colectivos, olvidar la historia. Pero nosotros, hoy, aquí, no podemos, no queremos, no debemos olvidar. Pues si olvidáramos, olvidaríamos nuestra propia identidad, sepultaríamos la camaradería, el protagonismo social de la historia, el derecho a vivir la solidaridad hasta las últimas consecuencias. Si olvidáramos, cerraríamos los ojos para dejar desatada la locura bestial que aquí arrasó, entre 1974 y 1978, no sólo los jardines, sino la misma humanidad.

c) La identificación en febrero de 1979 de los restos hallados en una vieja mina de cal abandonada en los cerros de **Lonquén** como los restos óseos de quince

personas secuestradas por Carabineros y hechas desaparecer en octubre de 1973 fue la primera evidencia para los familiares de los detenidos desaparecidos de que sus seres queridos habían sido cruelmente asesinados. Aquel hallazgo tuvo un impacto brutal y Lonquén se convirtió, como Villa Grimaldi, en sinónimo del inmenso horror de la dictadura militar.

Desde hace varios años las familias Astudillo y Maureira, que perdieron a tres y cuatro familiares en aquella masacre, luchan por construir un memorial en el lugar donde estuvieron los hornos de cal donde fueron asesinados la noche del 7 al 8 de octubre de 1973. Pero desde abril de 2002 funciona a escaso kilómetro y medio de aquel lugar un inmenso vertedero (el relleno sanitario Santa Marta), a donde cada día llegan cuarenta mil toneladas de desechos de la Región Metropolitana, a pesar de que en la campaña electoral de 1999 Ricardo Lagos se comprometió a proteger este lugar. Emilio Astudillo señala^{xxxv}:

Queremos construir un monumento que recuerde a las generaciones venideras los crímenes atroces de la dictadura para que nunca más vuelvan a suceder y para ello es imprescindible mantener el lugar limpio. Lo que sucedió en Lonquén es un ejemplo de lo que pasó en un tiempo negro de nuestra historia.

VIII. Recuperar la memoria para construir el socialismo del siglo XXI

Chile vive un esperanzador proceso de recuperación de la memoria histórica que está íntimamente ligada a la lucha por una democracia auténtica, libre de las tutelas impuestas por la dictadura y liberada del modelo neoliberal. Mi interés por la historia reciente chilena nace y se nutre de mis convicciones políticas y no encuentro mejores palabras para explicarlo que esta cita de la historiadora chilena María Angélica Illanes^{xxxvi}:

La nueva etapa a la que debemos entrar consiste, a mi juicio, en la memoria de la política, en hacer revivir a nuestras compañeros y compañeros a través de la restitución en nosotros de su habla crítica, de su ideario revolucionario, de su proyecto de sociedad humanista y solidaria. Debemos retomar la hebra histórica de su proyecto. Recuperar la memoria hoy consiste, a mi juicio, en romper el peso inmovilizador de la ideología del determinismo histórico, retomando el ideario del cambio social, asumiendo la crítica de la estructura de dominación, recuperando el ideario socialista. Sólo en este sentido la memoria trabaja conjurando la derrota de la muerte sin causa.

-
- ⁱ *Allende vive. 30 años*. Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Santiago de Chile, 2004. p. 31.
- ⁱⁱ Briones, Álvaro: "No vindicar el pasado". *La Época*, 3 de agosto de 1997. p. 10.
- ⁱⁱⁱ Sánchez, Gervasio: "Chile, treinta años de soledad". *El Mundo*, 11 de septiembre de 2003. p. 4.
- ^{iv} *El País*, 11 de marzo de 1998. p. 2.
- ^v Para un análisis cronológico de la detención de Pinochet en Londres, véase: Amorós, Mario: *Chile, la herida abierta*. Paz con Dignidad-AHIMSA. Madrid, 2001. Publicado también en Rebelión: <http://www.rebellion.org/docs/5297.pdf>
- ^{vi} *La Tercera*, 12 de diciembre de 1998. Edición digital: www.tercera.cl
- ^{vii} *Alternativa*, nº 11. pp. 84-92. Revista del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz de Chile.
- ^{viii} Amorós, Mario: *Después de la lluvia. Chile, la memoria herida*. Cuarto Propio. Santiago de Chile, 2004. p. 258.
- ^{ix} *ibídem*, p. 428.
- ^x En declaraciones publicadas por *El Mercurio* al día siguiente de su discurso televisado, Aylwin (cómplice del golpe de estado en su papel de presidente del PDC en septiembre de 1973) afirmó: "Muchos compatriotas creen que es hora de cerrar este capítulo. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia un futuro que nos una, en vez de al pasado que nos separa".
- ^{xi} Moulian, Tomás: "La liturgia de la reconciliación". En: Richard, Nelly (ed.): *Políticas y estéticas de la memoria*. Cuarto Propio. Santiago de Chile, 2000. pp. 24-25.
- ^{xii} Marchesi, Aldo: "Vencedores vencidos: las respuestas militares frente a los informes 'Nunca Más' en el Cono Sur". En: Hershberg, Eric y Agüero, Felipe (comps.): *Memorias militares sobre la represión en el Cono Sur: Visiones en disputa en dictadura y democracia*. Siglo XXI. Madrid, 2005. p. 193.
- ^{xiii} Gillaudat, Patrick y Mouterde, Pierre: *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 1998. p. 207.
- ^{xiv} Tótoro Daulis, Dauno: *La cofradía blindada. Chile civil y Chile militar: trauma y conflicto*. Planeta. Santiago de Chile, 1998. p. 107.
- ^{xv} *Pluma y Pincel*, marzo de 1994. p. 27.
- ^{xvi} *El País*, 8 de junio de 2000. p. 7.
- ^{xvii} *La Nación*, 13 de agosto de 2003. Edición digital: www.lanacion.cl
- ^{xviii} Jelin, Elizabeth: *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI. Madrid, 2002. p. 39.
- ^{xix} *La Nación*, 11 de septiembre de 2003. Edición digital: www.lanacion.cl
- ^{xx} *El Mercurio*, 3 de agosto de 2003. Edición digital: www.elmercurio.cl
- ^{xxi} *La Tercera*, 5 de enero de 2003. Edición digital: www.tercera.cl
- ^{xxii} *Ercilla*, 15 de octubre de 2003. Edición digital: www.ercilla.cl
- ^{xxiii} *La Nación*, 12 de septiembre de 2003. Edición digital: www.lanacion.cl
- ^{xxiv} *Allende vive. 30 años*. p. 31.
- ^{xxv} *El País*, 6 de noviembre de 2004. p. 12.
- ^{xxvi} *La Tercera*, 5 de noviembre de 2004. Edición digital: www.tercera.cl
- ^{xxvii} El mismo día que Cheyre publicó su artículo la AFDD difundió una declaración pública en la que aseguraron: "Los dichos del general Cheyre tendrán sentido en la medida que vayan acompañados de acciones concretas: entregar la información del paradero de nuestros familiares detenidos desaparecidos; terminar con la defensa jurídica de los violadores de derechos humanos que se encuentran procesados; depurar definitivamente las filas del ejército de todos quienes estén involucrados en los crímenes de lesa humanidad e incorporar en la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas los valores democráticos y de respeto inalienable de la vida e integridad de todas las personas, independientemente de sus opciones políticas e ideológicas".

^{xxviii} Para una selección de testimonios sobre la tortura en Chile, véase nuestro artículo: <http://www.rebelion.org/docs/19732.pdf>

^{xxix} Véase la versión íntegra del Informe Valech en: www.comisiontortura.cl

^{xxx} Discurso consultado en www.presidencia.cl

^{xxxi} Para una relación de los torturadores de los aparatos represivos de la dictadura, véase: Oliva G., Julio: *Informe Gitter. Los criminales tienen nombre*. Editorial Siglo XXI. Santiago de Chile, 2003.

^{xxxii} Puede consultarse en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=8972>

^{xxxiii} Documento publicado por la Agencia de Noticias de Chile: <http://www.anchi.cl>

^{xxxiv} Brinkmann, Beatriz: *Itinerario de la impunidad. Chile, 1973-1999. Un desafío a la dignidad*. CINTRAS. Santiago de Chile, 1999. p. 125.

^{xxxv} Amorós (2004), p. 433.

^{xxxvi} Seminario "Memoria del Genocidio: Casa José Domingo Cañas". Palacio Ariztía. Santiago de Chile, 8 y 9 de julio de 2004. Agradecemos a la historiadora Claudia Videla Sotomayor el envío de la ponencia de María Angélica Illanes.